

Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña Rocío Macarena García De La Pastora Zavala, abogada, cédula de identidad nacional 10.387.4165, en representación, de la parte demandante Transecom SpA., Rol Único Tributario 77.060.309-9, sociedad del giro de actividades de transporte complementarias, domiciliada para estos efectos en Avenida Vitacura 2939, piso 12, Comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, quien deduce reclamo judicial en contra de la resolución de multa N° 1859/22/85 dictada con fecha 01 de septiembre de 2022, notificada a esta parte a través de correo electrónico, cuya recepción data del jueves 08 de septiembre del año en curso, dictada por la fiscalizadora señora Ana Mabel Muñoz Pino, en representación de la Inspección Comunal Del Trabajo Santiago Norte, servicio público representado legalmente por el Inspector doña Gloria Alejandra Fuentes Riquelme, ambos domiciliados San Antonio N° 427, piso 6, comuna de Santiago a fin de que S.S. la admita a tramitación, para que conforme los antecedentes que expondré más adelante y los que se aportarán en el curso del proceso y de los fundamentos de derecho que se invocan, se acoja la presente acción, dejando sin efecto la multa reclamada.

Antecedentes de Hecho

La Multa Cursada

Con fecha 01 de septiembre de 2022, durante el curso en el contexto de una fiscalización efectuada a su representada, la señora fiscalizadora doña Ana Mabel Muñoz Pino, cursó la resolución multa N° 1859/22/85, en la cual constata: No exhibir toda la documentación Artículos 31 y 32 del D.F.L. N°2 de 1967, necesaria para efectuar las labores del Ministerio del Trabajo y Previsión fiscalización Social. Finalmente, la resolución del fiscalizador se emitió como sigue:

1. No escriturar el contrato de trabajo respecto de los siguientes Trabajadores y contratado con fecha: don Pedro Baez (21.07.22); doña Verónica Santeliz (27.04.22); doña Andrea Comenarez (03.01.22); doña María Arezo (13.12.21); dona Mireya Mora (04.01.22); Dona Breytsel Daza (12.01.22); doña María Medrano (12.01.22); doña Yanira Morales (01.04.21); doña Andrea Nelson (30.03.22), don David Diaz (14.03.22); don Diego Dugarte (10.12.21); don Carlos Montero (08.01.21); don Oscar García (09.07.21); don Maurice Guillen (09.08.22); don Anthony Hernández(05.10.21); don Francis Portillo (21.09.21); doña Sheyla Apaza Pineda (01.07.21); don Marco Urdaneta (26.01.21); Noelia Solarte Bermudez (15.06.21); doña Johana Gruz (24.12.20); doña Norbeidy Calderon De La Rosa (24.12.20); doña Gloriana Castillo (08.02.22); doña Melani Apaza (17.04.21); doña Sofía Ottiniano (22.03.22); doña Maria Sequeira (06.08.22); don Luis Góngora (01.03.22); doña Lilibeth Coronato (01.12.21); doña Tatiana Muñoz (01.05.22);doña



Yessenia Pardo (01.04.22); doña Lucia Centeno(24.05.22); doña Yorgely Vicerza (19.06.22); don Soib Gotera (28.04.22); doña Luisa Galeano (12.09.20); doña Camila Tapia (21.05.22); doña Siuly Martínez (26.03.22); doña Arianna Olivar (15.03.21); doña Eliana Molina (12.01.21); don Leonardo Salas (14.03.22); don Juan Pérez (29.04.22); doña Molayela Lujano (07.12.20); don Kevin Yepes (09.06.22); don Paolo Mardones (01.07.22) ; doña Georgina Rodríguez (01.08.21); doña Susan Silva (01.11.21); don Moisés Marrero(15.02.22); doña Daniela García (02.06.22) don Yohan Rosendo(01.03.22); doña Karelis Rodríguez (01.06.22); doña Eliamy Jiménez (16.06.22); doña María Arguedas (01.01.22); don Jesús Carreón (01.11.21); don Efraín Zambrano (08.08.22); doña Yesenia González (09.08.22); doña Eva Relmuan (12.01.22) y don Jackfferson Gonzalez (13.03.22)”

2. No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización según el siguiente detalle: Registros de Asistencia, Comprobantes de Remuneraciones y Cotizaciones Previsionales desde la fecha de contratación da cada trabajador. Lo anterior, respecto de los trabajadores que a continuación se indican: don Pedro Baez (21.07.22); doña Verónica Santeliz (27.04.22); doña Andrea Comenarez (03.01.22); doña María Arezo (13.12.21);dona Mireya Mora (04.01.22); Dona Breytsel Daza (12.01.22); doña María Medrano (12.01.22) doña Yanira Morales (01.04.21); doña Andrea Nelson (30.03.22), don David Diaz (14.03.22) ; don Diego Dugarte (10.12.21); don Carlos Montero (08.01.21); don Oscar García (09.07.21) ; don Maurice Guillen (09.08.22); don Anthony Hernández(05.10.21); don Francis Portillo (21.09.21) ; doña Sheyla Apaza Pineda (01.07.21); don Marco Urdaneta (26.01.21); Noelia Solarte Bermudez (15.06.21); doña Johana Gruz (24.12.20); doña Norbeidy Calderon De La Rosa (24.12.20); doña Gloriana Castillo (08.02.22); doña Melani Apaza (17.04.21); doña Sofia Otiniano (22.03.22); doña Maria Sequeira (06.08.22); don Luis Góngora (01.03.22); doña Lilibeth Coronato (01.12.21); doña Tatiana Muñoz (01.05.22);doña Yessenia Pardo (01.04.22); doña Lucia Centeno(24.05.22); doña Yorgely Vicerza (19.06.22); don Soib Gotera (28.04.22); doña Luisa Galeano (12.09.20); doña Camila Tapia (21.05.22); doña Siuly Martinez (26.03.22); doña Arianna Olivar (15.03.21); doña Eliana Molina (12.01.21); don Leonardo Salas (14.03.22); don Juan Pérez (29.04.22); doña Molayela Lujano (07.12.20); don Kevin Yepes (09.06.22); don Paolo Mardones (01.07.22); doña Georgina Rodríguez (01.08.21); doña Susan Silva (01.11.21); don Moisés Marrero(15.02.22); doña Daniela García (02.06.22) don Yohan Rosendo(01.03.22); doña Karelis Rodríguez (01.06.22); doña Eliamy Jiménez (16.06.22); doña María Arguedas (01.01.22); don Jesús Carreón (01.11.21); don Efraín Zambrano (08.08.22); doña Yesenia González (09.08.22); doña Eva Relmuan (12.01.22) y don Jackfferson Gonzalez (13.03.22).

1.- Aplicar al infractor individualizado, por la(s) infracción(es) señalada(s), la(s) multa(s) administrativa(s) a beneficio fiscal, que a continuación se indica(n)



Cantidad	Tipo		
1859/22/85	550.00 UTM	\$ 32.324.600	No
1859/22/85	26.73 UTM	\$ 6.891.957	No

Antecedentes preliminares

Señala que con fecha 19 de agosto de 2022 la fiscalizadora doña Ana Mabel Muñoz Pino concurrió a las dependencias de su representada. Aquella visita se suscitó en contexto de la fiscalización Número 1307/2022/1314 practicada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte a Transecom. Aquella fiscalización concluyó con la señora fiscalizadora indicando que correspondía multar a su representada por no escriturar los contratos de los prestadores de servicio aludidos en la resolución multa y que igualmente se nos cursaría multa por no exhibir la documentación solicitada. Sin perjuicio de lo anterior, la Inspectora nos citó a las dependencias ubicadas en San Antonio N° 427, 6° piso, para que pudiéramos exhibir la documentación requerida.

Aquella citación se efectuó en un primer lugar para el día 23 de agosto de 2022, pero finalmente se realizó el día 29 del mismo mes. En aquella oportunidad nuevamente concurrimos ante la fiscalizadora quien les anticipó que cursaría multa por no escriturar los contratos de trabajo y asimismo por no exhibir la documentación solicitada. Tal y como le planteamos en la primera visita inspectiva, el cumplimiento de las exigencias de la fiscalizadora era imposible para su representada.

Las personas aludidas en la resolución multa son prestadores independientes que no se encuentran regulados por el Código del Trabajo en la ejecución de sus servicios. En efecto son prestadores de servicios civiles que cobran sus honorarios a través de boletas de honorarios. Dado que no tienen la calidad de trabajadores a la luz del Código del Trabajo, ciertamente no había contrato que escriturar ni menos aún documentación laboral que exhibir. No existiendo entonces la documentación, la exigencia de la fiscalizadora era imposible de cumplir. Es importante mencionar que en ambas oportunidades la fiscalizadora en comentario expresó claramente que a su criterio la Inspección del Trabajo gozaba de facultades para declarar la existencia de una relación laboral, que aquello ella podía constatarlo en el acto y que ello era parte del razonamiento que la llevaba a la conclusión de la necesidad de cursar la multa que por este acto se reclama.

Respecto del término del proceso de fiscalización

Como ya indica el proceso de fiscalización culminó con la dictación de la Resolución Multa N°1859/22/85, multa que por este acto se reclama. Lo anterior por cuanto aquella adolece de graves errores de hecho que la hacen improcedente. En efecto la multa parte de supuestos absolutamente errados y que como se expondrá en los



fundamentos de derecho implican una extralimitación de las funciones conferidas por la ley a la Inspección del Trabajo, así como una transgresión a los límites que la Constitución Política de la República fija para las actuaciones de la administración y de los Órganos Públicos.

Dicho lo anterior, señala que su representada no es empleadora de los prestadores aludidos en la resolución multa. Si bien existe un vínculo jurídico entre Transecom y a quienes alude la multa, lo cierto es que aquel es únicamente un contrato de prestación de servicios a honorarios. En efecto la relación que media entre las partes es una de carácter netamente civil y en ningún caso reviste el carácter laboral que erradamente pretende atribuir el fiscalizador, cuestión para la que por lo demás no tiene jurisdicción ni competencia.

En este estado de cosas, especialmente en cuanto no existe una relación de carácter laboral en base a la cual se pudieran haber cursado legítimamente las multas, se torna en un imposible constatar la existencia de las infracciones que señala la fiscalizadora. En definitiva, las normas invocadas no son aplicables al caso concreto, careciendo entonces la multa de sustento fáctico y de fundamento jurídico.

De lo anteriormente expuesto puede concluirse que la resolución multa número 1859/22/85 dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Norte con fecha 01 de septiembre de 2022 ha sido dictada:

1. Excediendo las facultades del órgano administrativo, al presuponer una relación laboral inexistente.
2. Arrogándose el ejercicio de la jurisdicción cuando aquella correspondía únicamente a los juzgados de letras del trabajo.
3. Actuando fuera de la esfera de su competencia contraviniendo el principio de legalidad y juridicidad.
4. En contravención a las normas de un debido proceso administrativo.
5. En contravención a la ley (artículo 8 del Código del Trabajo).
6. Sin la debida fundamentación, en consecuencia, multando a través de un acto arbitrario.
7. De manera completamente desproporcionada, aplicando sin razón expresada alguna el monto más alto posible.

Solicita tener por interpuesta reclamación judicial de multa, acogerla íntegramente revocando la multa en su totalidad, o bien reduciendo prudencialmente su



cuantía al tenor de lo expuesto en los fundamentos de derecho de esta presentación, con costas.

SEGUNDO: Que, comparece doña AMANDA GAETE SANTELICES, abogada, por la parte reclamada, quien contesta el reclamo de autos deducido por la empresa Transecom SPA, en contra de la Resolución de Multa N° 1859/22/85, de fecha 01 de septiembre de 2022; negando todos los hechos presentados en el reclamo por la contraria, salvo aquellos expresamente admitidos; solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, en razón de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que pasa a exponer:

Hace presente que los hechos que configuran las infracciones sancionadas fueron constatadas por la fiscalizadora de este Servicio doña Ana Muñoz Pino, en el cumplimiento de sus funciones, los cuales fueron consignados en el informe de fiscalización y resolución de multa que se incorporará en la etapa procesal pertinente, documentos que gozan de Presunción Legal de Veracidad establecida en el artículo 23 de D.F.L. N°2 de 1967, Ley Orgánica de este Servicio, que opera para todos los efectos legales, incluso para la prueba judicial, lo que en concordancia con el art. 1698 del Código Civil, determina que la carga de la prueba corresponderá a la reclamante, quien deberá probar que su actuar se ajusta completamente a las normas laborales vigentes.

De las alegaciones de la reclamante:

En su reclamo la actora señala respecto de ambas multas, que hubo una extralimitación de las facultades de parte de la fiscalizadora y una transgresión a los límites impuestos para la actuación de la administración y órganos públicos, en atención a que supuestamente la empresa tendría una relación de carácter civil con los trabajadores individualizados en la resolución de multa, y que la fiscalizadora no estaría facultada para calificar dicho vínculo como laboral. Además, señala que la resolución no habría sido debidamente fundada y que sería desproporcionada.

En cuanto a la alegación principal vertida por la reclamante, referida al extralimitación de las facultades de la fiscalizadora y las consecuencias de su actuar, debe hacerse presente que no es efectivo que se haya incurrido en el vicio señalado, toda vez que se encuentra facultada para calificar jurídicamente los hechos y tiene el deber de sancionar, en caso de detectar el incumplimiento a la normativa laboral, según se pasará a exponer.

Para efectos de desarrollar lo señalado, es necesario tener a la vista lo dispuesto en el artículo 505 del Código del Trabajo, establece:



“La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen”.

A mayor abundamiento el artículo 1º D.F.L. de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, señala expresamente las facultades y consecuentemente los límites a la acción de la Dirección del Trabajo. En el sentido indicado entonces, el citado artículo, en su letra a. señala:

“La Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el cual se vincula a través de la Subsecretaría del Trabajo.

Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden:

a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”

Como resulta manifiesto las normas recién transcritas contienen un texto expreso y claro, que señala que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación le corresponde a la Dirección del Trabajo. Al respecto, cabe destacar que dichas normas en ningún caso limitan la facultad de la Dirección del Trabajo, en cuanto al ejercicio de fiscalización y la constatación de los hechos, puesto que el organismo que represento fue creado precisamente con la finalidad de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, cuyo objeto, entre otros, dice relación con la protección de los derechos de los trabajadores.

En este sentido, no puede sostenerse que la actividad fiscalizadora no podría implicar la calificación jurídica de los hechos que son constatados, puesto que debe tenerse en cuenta que fiscalizar la aplicación de la legislación laboral conlleva necesariamente la actividad de realizar un juicio de valor sobre la forma en como esa realidad contractual específica se ajusta a la normativa legal, juicio que subyace a la resolución de multa, pues precisamente el ejercicio de las facultades fiscalizadoras comprenden la necesidad de verificar los hechos y luego contrastarlos con las normas cuyo cumplimiento se debe comprobar. Lo anterior, no obsta el ejercicio de las facultades jurisdiccionales, pues se trata de potestades expresamente atribuidas a esta entidad.

Expone que el determinar que la actividad fiscalizadora de este Servicio no podría implicar la calificación jurídica de los hechos, menoscabaría gravemente esta facultad, pues bastaría la simple negación del empleador de una existencia de a la relación laboral que el fiscalizador quede privado de toda posibilidad de cumplir su función, la cual precisamente fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral,

despojando de contenido y protección al trabajador que es precisamente la parte más débil de la relación laboral.

Ahora bien, en el caso de autos, tal como se indica en el informe de fiscalización, previamente citado, se verificó que los trabajadores cumplan las condiciones establecidas en el artículo 7 del Código del Trabajo. Así las cosas, cabe tener en cuenta que el artículo 8 del mismo Código señala que “Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo”. Siendo esta la situación constatada por la fiscalizadora actuante, no sería efectivo lo alegado por la actora, en cuanto a que se habría infringido la normativa vigente, considerando que el artículo 8 del Código del Trabajo, indicaría que las normas se aplicarían a los trabajadores independientes en los casos en que expresamente se refieran a ellos, toda vez que, conforme a lo constatado, no sería ese el caso de autos.

Tampoco es efectivo que haya existido una vulneración al debido proceso, toda vez que la fiscalizadora actuó conforme a la normativa vigente y a las instrucciones de servicio referidas al procedimiento de fiscalización, contenidas en el “Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo” conforme a lo dispuesto en el artículo 505-A del Código del Trabajo, previamente establecidas, siendo notificada e informada la reclamante del procedimiento de fiscalización. Tampoco es efectivo que se haya arrogado el ejercicio de la jurisdicción, según ya se dio cuenta en los párrafos anteriores.

En cuanto a la alegación de la reclamante referida a que se ha infringido el principio de non bis in ídem, al haber sido sancionada 55 veces por el mismo hecho infraccional, cabe hacer presente que el artículo 9° del Código del Trabajo, en sus incisos 1° y 2°, dispone:

“El contrato de trabajo es consensual; deberá constar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante.

El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de quince días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de una a cinco unidades tributarias mensuales.”

En este sentido, la primera infracción detectada en el caso de autos debe considerarse respecto de cada trabajador afectado, señalándose una multa específica para tal efecto. Así las cosas, para efectos de determinar la cuantía de la multa, debe considerarse la cantidad de trabajadores afectados, según se indica en el “Tipificador de Hechos Infraccionales y Pauta Para Aplicar Multas Administrativas”³ de la Dirección del



Trabajo, que es de público conocimiento y se encuentra disponible en la página web del servicio que represento. En cuanto a la segunda infracción, esta tiene un rango único para su aplicación, sin distinción de la cantidad de trabajadores afectados, toda vez que nada dice al respecto la normativa citada, por lo que, con mayor razón aún, no resulta atendible lo expuesto por la reclamante.

En cuanto al concurso infraccional señalado, tampoco resulta aplicable al caso de autos, si la norma indica que el empleador será sancionado en atención al contrato no escriturado, debiendo considerarse para efectos de la cuantía a cada trabajador afectado. Adicionalmente, debe hacerse presente que la reclamante lo que pretende es que se disminuya la cuantía de la multa, aprovechándose de su propia negligencia, al incurrir en la infracción respecto de 55 trabajadores, para obtener una condena menor, sin considerar que la norma contempla una sanción especial, la gravedad del hecho y la cantidad de trabajadores afectados.

En cuanto a la alegación referida a la supuesta falta de fundamentación de la resolución de multa, hace presente que no es efectivo, toda vez que la resolución de multa considera elementos suficientes para su adecuada comprensión. Lo anterior, teniendo en cuenta que respecto de ambas infracciones se indican los hechos constatados que constituyen cada infracción, los trabajadores afectados y la normativa aplicable. Además, cabe hacer presente que la resolución de multa es una resolución mediante la cual concluye el procedimiento de fiscalización, que fue conocido por la parte reclamante. En este procedimiento la actora fue notificada del inicio de la fiscalización, informándosele la materia a revisar, se levantó acta de constatación de infracciones, y se levantó acta de notificación de requerimiento de documentación y citación a las dependencias de la inspección. Todo lo anterior, sumado al reclamo interpuesto, dan cuenta que la reclamante ha podido comprender el motivo de las sanciones y en caso alguno se ha visto afectado su derecho a defensa, por lo que debe ser desestimada esta alegación.

En cuanto a la lo señalado por la actora respecto de la cuantía de la primera multa, hace presente que la calificación de gravísima, que determina la cuantía de la infracción, fue realizada conforme a las instrucciones del servicio, reflejadas en el “Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo” y en el “Tipificador de Hechos Infraccionales y Pauta Para Aplicar Multas Administrativas”. Al respecto, cabe hacer presente que el artículo 506 quáter del Código del Trabajo dispone lo siguiente:

“Para la determinación del monto de la sanción, dentro de los rangos a que se refiere el artículo 506, la resolución indicada en el artículo 505-A incluirá una categorización de ellas, y las clasificará en leves, graves y gravísimas, para lo cual se



considerarán como criterios la naturaleza de la infracción, la afectación de derechos laborales, el número de trabajadores afectados y la conducta del empleador.”

Así las cosas, es el legislador quien ha ordenado que la categorización debe estar contenida en la resolución indicada en el artículo 505-A del Código del Trabajo, que se refiere al “Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo”⁴. Este manual, que es de público conocimiento y se encuentra disponible en la página web del servicio que represento, contempla en la página 40 y siguientes la sección “Determinación del monto de la sanción”, donde se pueden verificar las instrucciones seguidas por la fiscalizadora, por lo que su actuar no resulta arbitrario, sino conforme a las instrucciones del servicio, y tampoco se incurre en un error que permita modificar lo resuelto.

En cuanto a los trabajadores afectados, siendo estos individualizados en la resolución de multa, no cabe duda de que se trata de 55 trabajadores.

En cuanto a la primera multa, respecto a la suma de 10 UTM aplicada por cada trabajador, cabe señalar que se menciona igualmente en la resolución de multa que se ha aplicado considerando lo dispuesto en el artículo 506 inciso 6° del Código del Trabajo, que indica:

“En el caso de las multas especiales que establece este Código, su rango se podrá duplicar y triplicar, según corresponda, si se dan las condiciones establecidas en los incisos cuarto y quinto de este artículo, respectivamente y de acuerdo a la normativa aplicable por la Dirección del Trabajo.”

Considerando lo señalado, debe tenerse en cuenta que el inciso cuarto se refiere a los casos en que se trate de medianas empresas. Esta calificación obedece a lo contemplado por el legislador en el artículo 505 bis que indica que será calificada como mediana empresa aquella que tuviere contratados de 50 a 199 trabajadores, lo que ocurre en el caso de autos. Todo lo anteriormente expuesto permite concluir que lo resuelto por la fiscalizadora se ajusta a derecho y consta en las instrucciones que son de público conocimiento, por lo que no cabe más que concluir que debe rechazarse el reclamo.

En cuanto a la alegación referida al tamaño de la empresa, resulta evidente y concordante con lo resuelto en la reconsideración de multa, que la fiscalizadora tuvo que considerar a los 55 trabajadores individualizados en la resolución de multa para efectos de determinar el tamaño de la empresa. Resulta contradictorio con lo constatado en el procedimiento de fiscalización que se determine que la empresa no escrituró un contrato con 55 trabajadores y a la vez que esos trabajadores no deben ser considerados para efectos de determinar el tamaño de la empresa, como si el vínculo laboral no existiera.



En cuanto a la alegación de que no era posible escriturar un contrato no pactado, debemos remitirnos a lo señalado previamente, en cuanto a que la fiscalizadora constató la existencia de elementos suficientes para efectos de establecer que, independientemente del contrato suscrito por la parte empleadora, entre las partes existía un vínculo laboral, por lo que la empresa debió escriturar un contrato de trabajo, sin que exista error de la fiscalizadora en este punto ni exceso de facultades, por lo que, reconociendo la reclamante que dichos contratos de trabajo no se encontraban escriturados, no cabe más que rechazar el reclamo interpuesto.

En cuanto a lo señalado respecto de la segunda multa, en cuanto a que a lo imposible nadie está obligado, hace presente que, considerando la relación mantenida con los trabajadores de su empresa, la actora tendría que haber contado con la documentación requerida y que esta no fue exhibida. Las explicaciones dadas por la reclamante no hacen más que confirmar el hecho señalado por la fiscalizadora, por lo que no existe error de hecho en este punto. Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que, independientemente de lo alegado por la reclamante, pudo verificar la fiscalizadora que los trabajadores debían registrar su asistencia mediante un huellero, por lo que no se aprecia cuál era la imposibilidad que le afectaba a la actora para la exhibición del registro de asistencia. Asimismo, teniendo la empleadora la obligación de contar con la documentación requerida, no puede aprovecharse de su propia negligencia, alegando que la documentación no existe, para efectos de solicitar que la multa sea dejada sin efecto, toda vez que esto significa solicitar que una sanción sea dejada sin efecto basándose en la existencia de una infracción otra obligación, lo que no resulta posible de sostener.

Así las cosas, considerando todo lo expuesto por esta parte, no cabe sino concluir que la resolución de multa se ha emitido dentro del marco jurídico establecido, sin que existan ninguno de los vicios que señala la actora, siendo además cada sanción proporcional y establecida conforme a las instrucciones vigentes, por lo que debe ser rechazado el reclamo en todas sus partes.

Solicita tener por contestado el reclamo de autos, declarar en definitiva el rechazo del mismo en todas sus partes, manteniéndose firme la Resolución de Multa N° 1859/22/85, de fecha 01 de septiembre de 2022, dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, con costas a la reclamante.

TERCERO: Que, se celebró la audiencia preparatoria, oportunidad en que llamadas las partes a conciliación esta no se produjo. Luego, se establecieron como hechos **CONTROVERTIDOS**:

1. Efectividad de los hechos constatados por la fiscalizadora actuante al cursar la multa administrativa, hechos, circunstancias y pormenores.



2. Efectividad de que la multa cursada debe ser rebajada.

CUARTO: Que, las partes para acreditar sus alegaciones incorporaron al proceso, los siguientes medios legales de convicción:

PARTE RECLAMANTE

Documental:

1. Copia de resolución de multa N° 1859/22/85, de fecha 01 de septiembre de 2022 y dictada por Inspección Comunal del Trabajo Norte
2. Correo electrónico de notificación de la multa señalada en el punto anterior.

Testimonial: Previo juramento, declara don Leonardo Enrique Rebolledo Sepúlveda,

Exhibición de documentos:

La demandada exhibe, a satisfacción del demandante:

1.- La carpeta de fiscalización con todos los antecedentes que se tuvieron a la vista al momento de realizar la fiscalización, incluidos los antecedentes referentes a la cantidad de trabajadores y/o de personas que contaban con contrato de prestación de servicios y boletas que se consideraron.

Tener a la vista:

Se tiene a la vista causa caratulada Transecom con Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, seguida bajo el Rol de Ingreso I-266-2022 ante el 1° JLT de Santiago

PARTE RECLAMADA:

Documental:

1. Copia de Resolución de Multa N° 1859/22/85, emitida por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, con fecha 01 de septiembre de 2022.
2. Copia de Carátula de Informe de Fiscalización N° 1314, con su documento adjunto "Informe de Exposición", de fecha 31 de agosto de 2022.
3. Copia de Inicio de Fiscalización N° 1314, de fecha 17 de agosto de 2022.



4. Copia de Acta Constatación de Infracciones y Compromiso de Corrección, de fiscalización N° 1314, de fecha 19 de agosto de 2022.

5. Copia de Acta Notificación de Requerimiento de Documentación y Citación de la fiscalización N° 1314, de fecha 17 de agosto de 2022

Testimonial: Previo juramento, declara doña Ana Mabel Muñoz Pino.

QUINTO: Que analizados los elementos de convicción allegados a los autos, en virtud de las reglas de la sana crítica, esta sentenciadora ha arribado a las siguientes conclusiones:

a) Que, la multa cursada fue dictada con fecha 01 de septiembre de 2022, durante el curso en el contexto de una fiscalización efectuada a la empresa reclamante, por la fiscalizadora doña Ana Mabel Muñoz Pino, mediante la resolución multa N° 1859/22/85, por los siguientes hechos infraccionales:

1. No escriturar el contrato de trabajo respecto de los siguientes Trabajadores y contratado con fecha: don Pedro Baez (21.07.22); doña Verónica Santeliz (27.04.22); doña Andrea Comenarez (03.01.22); doña María Arezo (13.12.21); dona Mireya Mora (04.01.22); Dona Breysel Daza (12.01.22); doña María Medrano (12.01.22); doña Yanira Morales (01.04.21); doña Andrea Nelson (30.03.22), don David Diaz (14.03.22); don Diego Dugarte (10.12.21); don Carlos Montero (08.01.21); don Oscar García (09.07.21); don Maurice Guillen (09.08.22); don Anthony Hernández(05.10.21); don Francis Portillo (21.09.21); doña Sheyla Apaza Pineda (01.07.21); don Marco Urdaneta (26.01.21); Noelia Solarte Bermudez (15.06.21); doña Johana Gruz (24.12.20); doña Norbeidy Calderon De La Rosa (24.12.20); doña Gloriana Castillo (08.02.22); doña Melani Apaza (17.04.21); doña Sofia Otiniano (22.03.22); doña Maria Sequeira (06.08.22); don Luis Góngora (01.03.22); doña Lilibeth Coronato (01.12.21); doña Tatiana Muñoz (01.05.22);doña Yessenia Pardo (01.04.22); doña Lucia Centeno(24.05.22); doña Yorgely Vicerza (19.06.22); don Soib Gotera (28.04.22); doña Luisa Galeano (12.09.20); doña Camila Tapia (21.05.22); doña Siuly Martínez (26.03.22); doña Arianna Olivar (15.03.21); doña Eliana Molina (12.01.21); don Leonardo Salas (14.03.22); don Juan Pérez (29.04.22); doña Molayela Lujano (07.12.20); don Kevin Yepes (09.06.22); don Paolo Mardones (01.07.22) ; doña Georgina Rodríguez (01.08.21); doña Susan Silva (01.11.21); don Moisés Marrero(15.02.22); doña Daniela García (02.06.22) don Yohan Rosendo(01.03.22); doña Karelis Rodríguez (01.06.22); doña Eliamy Jiménez (16.06.22); doña María Arguedas (01.01.22); don Jesús Carreón (01.11.21); don Efraín Zambrano (08.08.22); doña Yesenia González (09.08.22); doña Eva Relmuan (12.01.22) y don Jackfferson Gonzalez (13.03.22)”

2. No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización según el siguiente



detalle: Registros de Asistencia, Comprobantes de Remuneraciones y Cotizaciones Previsionales desde la fecha de contratación da cada trabajador. Lo anterior, respecto de los trabajadores que a continuación se indican: don Pedro Baez (21.07.22); doña Verónica Santeliz (27.04.22); doña Andrea Comenarez (03.01.22); doña María Arezo (13.12.21); dona Mireya Mora (04.01.22); Dona Breysel Daza (12.01.22); doña María Medrano (12.01.22) doña Yanira Morales (01.04.21); doña Andrea Nelson (30.03.22), don David Diaz (14.03.22); don Diego Dugarte (10.12.21); don Carlos Montero (08.01.21); don Oscar García (09.07.21); don Maurice Guillen (09.08.22); don Anthony Hernández(05.10.21); don Francis Portillo (21.09.21) ; doña Sheyla Apaza Pineda (01.07.21); don Marco Urdaneta (26.01.21); Noelia Solarte Bermudez (15.06.21); doña Johana Gruz (24.12.20); doña Norbeidy Calderon De La Rosa (24.12.20); doña Gloriana Castillo (08.02.22); doña Melani Apaza (17.04.21); doña Sofia Ottiniano (22.03.22); doña Maria Sequeira (06.08.22); don Luis Góngora (01.03.22); doña Lilibeth Coronato (01.12.21); doña Tatiana Muñoz (01.05.22); doña Yessenia Pardo (01.04.22); doña Lucia Centeno(24.05.22); doña Yorgely Vicerza (19.06.22); don Soib Gotera (28.04.22); doña Luisa Galeano (12.09.20); doña Camila Tapia (21.05.22); doña Siuly Martinez (26.03.22); doña Arianna Olivar (15.03.21); doña Eliana Molina (12.01.21); don Leonardo Salas (14.03.22); don Juan Pérez (29.04.22); doña Molayela Lujano (07.12.20); don Kevin Yepes (09.06.22); don Paolo Mardones (01.07.22); doña Georgina Rodríguez (01.08.21); doña Susan Silva (01.11.21); don Moisés Marrero(15.02.22); doña Daniela García (02.06.22) don Yohan Rosendo(01.03.22); doña Karelis Rodríguez (01.06.22); doña Eliamy Jiménez (16.06.22); doña María Arguedas (01.01.22); don Jesús Carreón (01.11.21); don Efraín Zambrano (08.08.22); doña Yesenia González (09.08.22); doña Eva Relmuan (12.01.22) y don Jackfferson Gonzalez (13.03.22).

Lo que se tiene por acreditado mediante la incorporación de la resolución de multa y el informe de Fiscalización N° 1314.

d) Que, cabe recordar que los hechos constatados gozan de presunción Legal de Veracidad establecida en el artículo 23 de D.F.L. N°2 de 1967, Ley Orgánica, y conforme a lo dispuesto en el art. 1698 del Código Civil, implica que es la reclamante, quien deberá probar que su actuar se ajusta completamente a las normas laborales vigentes.

c) Que, la parte reclamante alega que la reclamada ha excedido las facultades del órgano administrativo, al presuponer una relación laboral inexistente, se ha arrogado el ejercicio de la jurisdicción cuando aquella correspondía únicamente a los juzgados de letras del trabajo. Actuando fuera de la esfera de su competencia contraviniendo el principio de legalidad y juridicidad, en contravención a las normas de un debido proceso administrativo, en contravención a la ley (artículo 8 del Código del Trabajo), y sin la debida fundamentación, en consecuencia, multando a través de un acto arbitrario.



d) Que, todos los argumentos vertidos en el reclamo deberán ser desestimados. En efecto, de un análisis de los documentos incorporados por la reclamada en particular de la copia de Acta Constatación de Infracciones y Compromiso de Corrección, de fiscalización N° 1314, de fecha 19 de agosto de 2022, y del testimonio de la testigo Ana Mabel Muñoz Pino, es posible tener por acreditado que la reclamante en el proceso de fiscalización al ser requerida, para que corrija las infracciones constatadas, se allana a repararlas íntegramente. Lo anterior, da cuenta el acta, bajo apercibimiento de multa ante su incumplimiento, informándole en el misma que verificada su total corrección, no se aplicará multa alguna por dichas infracciones, otorgándole a la demandante un plazo de 5 días para el cumplimiento de lo acordado, acta que fue firmada por del representante del empleador, don Felipe Peti, rut 19.078.075-9, corrección que no cumplió la demandante y que por lo tanto dieron origen a las multas reclamadas en autos, conforme da cuenta el informe de exposición.

Que, atendido lo anterior, no pueden acogerse los argumentos esgrimidos por la reclamante, ya que fue ella quien al comprometer la corrección de las infracciones constadas reconoce y valida los hechos que las sustentan reconociendo haber incurrido en las mismas, no pudiendo hoy desconocerlos y alegar que la demandada se excedió en sus atribuciones, máxime cuando firmó un acta de corrección, que dejaba expresamente establecido que el no cumplimiento de lo comprometido en el plazo de 5 días, daba origen a multas como ocurrió en autos.

Que, atendido lo anterior solo cabe rechazar la demanda, respecto a la solicitud de dejar sin efecto las multas reclamadas.

e) Que, también será desechada la solicitud de rebaja, ya que se observa atendido el número de trabajadores objeto de la multa, el tamaño de la empresa y lo dispuesto en los artículos 505 bis, 505 A, y 506 del Código del Ramo, la cuantía se encuadra dentro de los parámetros legales establecidos.

SEXTO: Que los demás antecedentes allegados al proceso, en especial la toda la prueba incorporada por la demandante, en nada alteran o desvirtúan las conclusiones a las que se ha llegado.

SEPTIMO: Que incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o estas.

Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes, 7, 11, 425 y siguientes, 432 y siguientes, 503 a 508 del Código del Trabajo; 1698 del Código Civil, artículos 31 y 32 del DFL N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se declara:

I. Que, se rechaza la demanda en todas sus partes.

II. Que, cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese, archívense los antecedentes en su oportunidad y hágase devolución de los documentos incorporados por las partes

RIT : I-321-2022

RUC : 22- 4-0430535-6

Pronunciada por doña DANIELA DE LOS ANGELES GONZALEZ MARTINEZ, Juez Suplente del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

